

# Seguridad

# DEMOCRÁTICA:

## Una mirada frente al marco social

**D**urante la segunda mitad de la década de los noventa, las noticias no cesaron de reportar victorias militares de todos los grupos armados al margen de la ley en Colombia. Imágenes como el “collar bomba”, la toma de Patascoy, las Delicias, la bomba del club El Nogal, la tortura y posterior asesinato de 12 indígenas Wuayuu en la Guajira, las constantes emboscadas a patrullas del ejército y la policía que dejaban muertos y secuestrados, eran el macabro aderezo para el pan del desayuno todos los días, y los encargados de transformar día a día las bases más profundas de los hogares colombianos, quienes terminaron por insensibilizarse frente a tan absurda cotidianidad.

En este contexto, con más de 16.000 hombres en los 110 frentes de las FARC, 10.000 en las AUC, y una cifra similar en el ELN<sup>1</sup>, Andrés Pastrana asumió la presidencia, proponiendo

Jorge Monroy P\* la “Paz y el Diálogo” como bandera de su gobierno, basado en un mandato popular (la papeleta verde), donde se cuestionaba a los votantes acerca de si deseaban la paz en Colombia, obedeciendo a la doctrina win-win de la escuela de Harvard<sup>2</sup>. Sin embargo, aunque ante el mundo y ante Colombia se le apostaba a una salida negociada al conflicto, se estaba gestando un plan político-militar, que haría posible una política estatal cuatro años más adelante.

Fuese o no una consecuencia prevista, el desafortunado proceso de paz generó en los colombianos residentes de las áreas urbanas, que habían vivido ajenos al conflicto, la evidencia de la realidad de la guerra y los llevó a sentir directamente sus efectos. La saturación de noticias e imágenes empezaron a crear una preocupación colectiva frente a la creciente violencia y así, Colombia conoció de frente la dinámica política de la guerra. De esta forma se transformó un

\* Estudiante de Economía. Universidad Externado de Colombia.

E-mail: monroyjorge@hotmail.com

<sup>1</sup> Ejército Nacional. “Guerrilla y autodefensas culpables del genocidio”. Revista del Ejército, Bogotá, Vol. 4, p. 7.

<sup>2</sup> Doctrina de resolución de conflictos en la cual se busca que ambas partes ganen, y que no hayan derrotados ni vencidos. Valencia, L. “Adiós a la política, bienvenida la guerra: secretos de un malogrado proceso de paz.” Bogotá, Intermedio Editores, 2002. p. 44. —doctrina de resolución de conflictos en la cual se busca que ambas partes ganen, y que no hayan derrotados ni vencidos”

conflicto de cincuenta años en una prioridad para la sociedad, obligando a tomar una posición frente al tema, poniendo el conflicto de frente a la comunidad internacional, pero sobre todo cerrándole las puertas políticas a los grupos armados al margen de la ley.

El concepto de mano firme, corazón grande fue el slogan mediante el cual el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe reunió casi diez años de cambios socio-políticos, que comenzaron con la guerra al narcotráfico y tuvieron un choque dramático durante el gobierno anterior, y que cuyo clímax llegó aquel jueves 20 de febrero de 2002 cuando luego de innumerables tropiezos, tan destructivos para el proceso de paz con las FARC, el Presidente Andrés Pastrana anunció a Manuel Marulanda, “yo le di mi palabra, y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, no sólo a mí, sino a todos los colombianos”<sup>3</sup>. Por lo tanto no fue una coincidencia que Álvaro Uribe ganara en la primera vuelta con mayoría, ni que la política de seguridad democrática (planeada hace más de 7 años y financiada con dinero de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, y un fortalecimiento militar radical), se desplegara en un ambiente casi mesiánico, en el instante mismo de la posesión presidencial el 7 de agosto de 2002.

Hoy, son innegables los resultados de la ofensiva militar y estatal no en términos de bajas<sup>4</sup>, como muchos pretenden ver la guerra, sino en términos del territorio ganado, y de la sensación de victoria, que

genera un ambiente de confianza, no necesariamente establecido en bases reales, pero que tiene ciertas repercusiones en la inversión económica y la credibilidad internacional (en cuanto a negocios se trata). Asimismo, es probable que la guerra se haya recrudecido, o tal vez esté lejos de ganarse; sin embargo, (sin tener en cuenta las ineficiencias que produce la guerra) la seguridad democrática ha hecho posible un cambio pequeño pero importante en el ejercicio del Estado de derecho, pues si bien hace diez años el Estado simplemente no podía hacer presencia rápida y efectiva después de un ataque, hoy al menos el gobierno se ha empeñado en dar la “sensación” de que el Estado puede responder y respaldar una población “para proteger los derechos de los colombianos, y fortalecer con la solidaridad de la ciudadanía el Estado de derecho, [...]”<sup>5</sup>.

Así descritas las bases sociales y políticas de la seguridad democrática, al ubicarla en el contexto latinoamericano actual parece no encajar en el modelo político de esta región, cuyas ideas de izquierda hacen parte de los nuevos gobiernos, incluso de los vecinos más cercanos de Colombia, como Hugo Chávez, Evo Morales y probablemente en Perú, Ollanta Humala, candidato a la presidencia de ese país, que en caso de ganar, conformarían “la troika andina”, que muestra claramente las tendencias políticas latinoamericanas.

En el caso colombiano, la discusión entre

---

<sup>3</sup> Pastrana, A. Discurso del fin de la zona de distensión. [www.mail-archive.com/colext@talklist.com/msg06459.html](http://www.mail-archive.com/colext@talklist.com/msg06459.html).

<sup>4</sup> El Tiempo. 18 de diciembre de 2004, “El Plan Patriota, una campaña militar sin comparación en la historia del conflicto colombiano”.

<sup>5</sup> [http://alpha.mindefensa.gov.co/day/Templates/images/resultados\\_politica\\_usa\\_enero04.pdf](http://alpha.mindefensa.gov.co/day/Templates/images/resultados_politica_usa_enero04.pdf)

la derecha y la izquierda se centra en definir si los recursos deben destinarse a la guerra o a la inversión social, y pareciera que dadas las condiciones del actual gobierno estas diferencias fueran irreconciliables, inclusive si las causas sociales fueran prioritarias para los gobiernos independientemente de su postura ideológica. En Latinoamérica, los proyectos políticos y sociales, están asociados con un tinte subversivo, lo cual ha dificultado la puesta en marcha de cambios necesarios para el desarrollo social, especialmente en nuestro país. Sin embargo, la política social en Colombia, no exige necesariamente un cambio de línea ideológica del gobierno, porque la guerra, si bien tiene un importante componente coercitivo, da una sensación de aseguramiento de las condiciones económicas luego del ejercicio de la fuerza, para que la solución no sea transitoria sino duradera.

Pensemos en un joven campesino cuyas opciones de vida se reducen a tres: la vinculación al grupo armado de influencia de su región, la siembra de un cultivo ilícito, o el enlistamiento al Ejército Nacional, formas de vida que traen implícito el fantasma de la muerte. En las dos primeras opciones los recursos provienen del narcotráfico, del secuestro o de la extorsión, donde sólo la aplicación de la ley puede evitar que la impunidad siga alimentando la guerra y desincentive el ejercicio de cierto tipo de delitos. Sin embargo, es absolutamente necesario que las personas del campo tengan alternativas rentables diferentes a la guerra, las cuales puedan satisfacer las necesidades no solamente básicas, sino las condiciones mínimas de los habitantes de las urbes. Así no sólo se transformaría el nivel de vida de las personas desde un punto de vista idealista, sino que aumentaría la producción,

se crearían estructuras productivas, el desarrollo social, y se garantizarían la seguridad alimenticia y, el crecimiento económico.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la situación actual de la guerra y su dinámica económica, la inversión social no debe dividir la política colombiana, pues en términos bélicos garantiza el debilitamiento estructural de los grupos armados al margen de la ley, y evita que nuevas personas ingresen al conflicto por necesidad económica, como también asegura la victoria total de la guerra contra el terrorismo.

De igual forma, la presencia estatal y el ejercicio constitucional de la protección de los ciudadanos, para recordarlo el siguiente párrafo de la Constitución Política: “*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares*” (art. 2, CP), no debe significar solamente fuerza pública e infraestructura militar, sino todas aquellas instituciones cuya omisión destruye el concepto de Estado de derecho y fomenta la violencia tanto rural como urbana, destruyendo y alimentando una guerra fratricida que nos cuesta más de 30.000 muertos al año.



Fotografía: Tropas de asalto acantonadas en Tolemaida. Paul Collier. 2000.